

RESOLUCIONES

Declaran de Interés Provincial al “Rally Argentina 2006”

en su Vigésima Sexta Edición, que se desarrollará entre los días 27 al 30 de Abril en la Provincia de Córdoba

AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES S.E.M.

RESOLUCION Nº 8

Córdoba, 28 de Febrero de 2006

VISTO: El expediente 0405-008668/2006 en el cual obran actuaciones relacionadas con el otorgamiento del Patrocinio Oficial al “RALLY ARGENTINA 2006”, en su vigésima sexta edición, que se desarrollará entre los días 27 al 30 de Abril de 2006, en la Provincia de Córdoba, con la organización del Automóvil Club Argentino.-

Y CONSIDERANDO:

Que, obra agregado en autos el pedido realizado por parte del Sr. Coordinador General del Rally Argentina, Arq. David Eli, solicitando que el acontecimiento de referencia, sea declarado de Interés Provincial.-

Que, EL Rally Argentina 2006, corresponde a la sexta fecha del Campeonato del Mundo que organiza la Federación Internacional de Automóvil (FIA) y en ella participan los mas destacados equipos oficiales y privados, internacionales y de nuestro país, con reconocidos pilotos de la especialidad.-

Que, la organización de esta competencia en

ediciones anteriores, fue distinguida por la Federación Internacional de Automovilismo por su alta efectividad en lo referido tanto a seguridad como a promoción del evento.

Que, este evento no solo es importante desde el punto de vista deportivo, sino también lo es desde el punto de vista turístico y económico, ya que moviliza gran cantidad de personas, lo que genera grandes beneficios para la provincia.

Que, además es importante destacar la cobertura mediática de la competencia, en las cifras de audiencia televisiva de todo el mundo .

Que, obra en autos el informe elaborado por el Coordinador de Deporte Organizado de esta Agencia, Profesor Horacio Garimaldi en el que resalta la importancia del evento de referencia y adscribe a la solicitud de Interés Provincial.-

Que obra agregado en autos el dictamen emitido por la Coordinación de Asuntos Legales de esta Agencia, bajo el Nº 003/2006.-

Que la característica de este acontecimiento posee entidad suficiente para hacerlo merecedor del reconocimiento del Gobierno Provincial, a través de la

Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta.-

Por ello, en uso de sus atribuciones y las disposiciones contenidas en el decreto 592/04,

**EL DIRECTORIO DE LA
AGENCIA CORDOBA DEPORTES S.E.M.
RESUELVE**

ARTÍCULO 1º.- DECLÁRASE DE INTERÉS PROVINCIAL al “RALLY ARGENTINA 2006”, en su vigésima sexta edición, que se desarrollará entre los días 27 al 30 de Abril de 2006, en la Provincia de Córdoba, con la organización del Automóvil Club Argentino.-

ARTÍCULO 2º.- LAS AUTORIDADES responsables del mencionado evento deberán elevar al Directorio de la Agencia, en un plazo no mayor de quince (15) días de finalizados los eventos un informe evaluativo sobre la actividad.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DR. HORACIO MANZUR
PRESIDENTE
AGENCIA CORDOBA DEPORTES S.E.M.

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

RESOLUCION Nº 298

Córdoba, 29 de Diciembre de 2005

Expediente Nº 0045-05758/93

VISTO: Este expediente en el que obra la Resolución Nº 00736/05 de la Dirección Provincial de Vialidad dependiente de este Ministerio, relacionada a la ejecución de la Obra: “OBRA BÁSICA Y ENARENADO EN CAMINO SECUNDARIO Nº 218 – TRAMO: JAMES CRAIK – RUTA PROVINCIAL Nº 10 -

DEPARTAMENTO: TERCERO ARRIBA – (Long. 18,51 Km)”.

Y CONSIDERANDO:

Que la citada Dirección propicia la aprobación del Acta de Recepción Definitiva, de fecha 22 de febrero de 2004, el Certificado Nº 3 Final de Precios Contractuales por el mes de diciembre de 2000 que asciende a la suma de \$ 14.030,00, el que será liquidado oportunamente mediante Orden de Pago Directa, según Informe Nº 78/05 del

Departamento I Administración y Personal dependiente de la Dirección Provincial de Vialidad, como asimismo solicita se apruebe el Certificado de Devolución del Fondo de Reparación correspondiente a los Certificados Nros. 1 Parcial de Precios Contractuales al 3 Final de Precios Contractuales, por la suma de \$ 1.546,43 y autorice el descuento de \$ 1.545,82 del Certificado de Fondo de Reparación.

Que lo propiciado por la Dirección Provincial de Vialidad es posible en virtud de los informes técnicos obrantes en autos y de las previsiones de los artículos 53 y 57 de la Ley de Obras Públicas Nº 8614, artículo 46 del Decreto Nº 4757/77 y

artículo 81 del Pliego General de Condiciones aprobado por Decreto Nº 4758/77.

Por ello, lo dictaminado por el Departamento Jurídico de este Ministerio con el Nº 812/05,

CONTINÚA EN PÁGINA 2

**EL MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS
RESUELVE:**

ARTÍCULO 1º.- APROBAR el Acta de Recepción Definitiva, de fecha 22 de febrero de 2004 correspondientes a los trabajos de la Obra: "OBRA BÁSICA Y ENARENADO EN CAMINO SECUNDARIO N° 218 – TRAMO: JAMES CRAIK – RUTA PROVINCIAL N° 10 - DEPARTAMENTO: TERCERO ARRIBA (Long. 18,51 Km)".

ARTÍCULO 2º.- APROBAR el Certificado N° 3 Final de Precios Contractuales por el mes de diciembre de 2000, que asciende a la suma de Pesos Catorce Mil Treinta (\$ 14.030,00), conforme lo indica la Gerencia de Recursos Económicos y Financieros de la Dirección Provincial de Vialidad, en su Documento de Contabilidad (Afectación Preventiva) N° 7534/05, según el siguiente detalle: Jurisdicción 1.25 - Programa: 265/6, Proyecto: 96 – Partidas: Principal 12 – Parcial 10 - Obra 393 del P.V.

ARTÍCULO 3º.- APROBAR el Certificado

de Devolución del Fondo de Reparación correspondiente a los Certificados Nros. 1 Parcial de Precios Contractuales al 3 Final de Precios Contractuales, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos Cuarenta y Seis Con Cuarenta y Tres Centavos (\$ 1.546,43).

ARTÍCULO 4º.- AUTORIZAR a la Gerencia de Recursos Económicos y Financieros de la Dirección Provincial de Vialidad para que proceda a la devolución del Fondo de Reparación dejándose establecido que el mismo fue constituido en efectivo, según Informe N° 78/05 del Departamento I Administración y Personal de la citada Dirección.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Gerencia de Recursos Económicos y Financieros de la Dirección Provincial de Vialidad dependiente de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.

Cr. OSCAR A. SANTARELLI
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

LEYES

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY: 9283

LEY DE VIOLENCIA FAMILIAR

CAPÍTULO I Del Objeto

ARTÍCULO 1º.- LAS disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto la prevención, detección temprana, atención y erradicación de la violencia familiar, definiendo tanto el marco preventivo como los procedimientos judiciales para lograr tal cometido.

ARTÍCULO 2º.- LOS bienes jurídicos tutelados por esta Ley son la vida, la integridad física, psicológica, económica y sexual, así como el desarrollo psicoemocional de los integrantes del grupo familiar.

ARTÍCULO 3º.- A los efectos de la aplicación de la presente Ley, se entenderá por violencia familiar, toda acción, omisión o abuso dirigido a dominar, someter, controlar o agredir la integridad física, psíquica, moral, psicoemocional, sexual y/o la libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque esa actitud no configure delito.

ARTÍCULO 4º.- QUEDAN comprendidas en este plexo normativo, todas aquellas personas que sufriesen lesiones o malos tratos físicos o psíquicos por parte de algunos de los integrantes del grupo familiar, entendiéndose por tal, el surgido del matrimonio, de uniones de hecho o de relaciones afectivas, sean convivientes o no, persista o haya cesado el vínculo, comprendiendo ascendientes, descendientes y colaterales.

ARTÍCULO 5º.- SE considera afectada toda persona que sufra alguno de los siguientes tipos de violencia:

a) Violencia física, configurada por todo acto de agresión en el que se utilice cualquier parte del cuerpo, algún objeto, arma, sustancia o elemento para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física de otra persona, encaminado hacia su sometimiento o control;

b) Violencia psicológica o emocional, originada por aquel patrón de conducta, tanto de acción como de omisión, de carácter repetitivo, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias o de abandono, capaces de provocar, en quien las recibe, deterioro o disminución de la autoestima y una afectación a su estructura de personalidad;

c) Violencia sexual, definida como el patrón de conducta consistente en actos u omisiones que infrinjan burla y humillación de la sexualidad, inducción a la realización de prácticas sexuales no deseadas y actitudes dirigidas a ejercer control, manipulación o dominio sobre otra persona, así como los delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, respecto de los cuales esta Ley sólo surte efectos en el ámbito asistencial y preventivo, y

d) Violencia económica, provocada por acciones u omisiones cuya manifiesta ilegitimidad implique daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, ocultamiento o retención de bienes, instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos, por las cuales las víctimas no logran cubrir sus necesidades básicas, con el propósito de coaccionar la autodeterminación de otra persona.

ARTÍCULO 6º.- LA aplicación de la presente Ley no afectará el ejercicio de los derechos que correspondan a la víctima de la violencia familiar, conforme a otros ordenamientos jurídicos en materia civil y penal, así como tampoco afectará los principios procesales aplicables en controversias de orden familiar.

CAPÍTULO II De la Jurisdicción y Competencia

ARTÍCULO 7º.- LA Autoridad de Aplicación de la presente Ley es el Ministerio de Justicia y Seguridad, o el organismo que en el futuro lo sustituya, en todo lo que no compete directamente al Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. A tal efecto, coordinará la planificación con otros organismos públicos y privados de la

FISCALÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESOLUCIÓN N° 10/06

Córdoba, 8 de marzo de 2006

Y VISTO:

I) La comunicación efectuada por el Presidente del Tribunal de Conducta Policial, Dr. Alberto Oscar BERTEA, por la que pone en conocimiento que el 28 de Febrero del año 2006 ha vencido el mandato de los representantes de la Fiscalía General de la Provincia en el Tribunal de Conducta Policial, representación que ejercían el Dr. Hugo Octavio VILLARRUEL, Titular, y el Dr. Edgardo Tomás CASAS, Suplente.-

Y CONSIDERANDO:

I) La Resolución N° 09/06 del 08 de Marzo de 2006, del Fiscal General de la Provincia, por la que delega en los Fiscales Adjuntos de la Provincia de Córdoba, por esta única vez, la facultad de designar los representantes Titular y Suplente, del Ministerio Público Fiscal de la Provincia para integrar el Tribunal de Conducta Policial –Ley 9120.-

II) Que conforme lo dispone la Ley citada, corresponde designar un representante Titular y un representante Suplente para integrar el Tribunal de Conducta Policial por el término de dos años.-

Por todo ello, los Fiscales Adjuntos de la Provincia,

RESUELVEN:

I) Designar representante Titular del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba, para integrar el Tribunal de Conducta Policial por el término de dos años al Director de Coordinación de la Fiscalía General de la Provincia, Dn. Juan Carlos VIDAL LASCANO – DNI 7.646.519.-

II) Designar Representante Suplente del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba, para integrar el Tribunal de Conducta Policial por el término de dos años al Prosecretario Letrado, de la Dirección de Política Criminal de la Fiscalía General de la Provincia, Dr. Francisco Javier SÁNCHEZ, DNI 17.157.492.-

III) Comunicar al Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Córdoba en los términos del Art. 23, inc. 36 de la Ley 9156.-

IV) Protocolícese, Notifíquese y Publíquese.-

HUGO DANIEL PITTARO
FISCAL ADJUNTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

LILIANA ALEJANDRA MALVASIO
FISCAL ADJUNTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Provincia y los municipios y comunas, tendientes a optimizar su objetivo.

ARTÍCULO 8º.- LA Autoridad de Aplicación, por razones de seguridad personal de la víctima y hasta tanto se concrete la intervención judicial, podrá disponer la aplicación de la medida prevista en el artículo 21, inciso c) de la presente Ley.

ARTÍCULO 9º.- LOS Tribunales de Familia, los Jueces de Menores y los Juzgados de Primera Instancia con Competencia Múltiple, entenderán también en cuestiones de violencia familiar, personales o patrimoniales que se deriven de ella.

ARTÍCULO 10.- LOS Juzgados en materia de familia y las Fiscalías serán competentes para atender situaciones de urgencia referidas a violencia familiar. A tal efecto, el Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio Público, determinarán, en su caso, el régimen de turnos para atender, en horas y días hábiles e inhábiles, los asuntos que requieran su intervención conforme a esta Ley.

ARTÍCULO 11.- LOS Juzgados de Paz con jurisdicción en localidades del interior provincial, tendrán competencia para entender en las urgencias en materia de violencia familiar, pudiendo disponer en forma provisoria las medidas pertinentes establecidas en esta Ley, para la protección de presuntas víctimas, quedando obligados a elevar los asuntos al órgano judicial correspondiente, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de haber tomado conocimiento de los hechos.

ARTÍCULO 12.- TODA actuación judicial en materia de violencia familiar, será notificada a la Fiscalía que corresponda, desde el inicio, la que deberá intervenir en todos los asuntos relativos a las personas e intereses de las víctimas de violencia familiar. Asimismo, podrá disponer las medidas previstas en el artículo 21, inciso c) de la presente Ley y al mismo tiempo comunicar su intervención a la Autoridad de Aplicación administrativa.

CAPÍTULO III De la Denuncia

ARTÍCULO 13.- LAS personas legitimadas para denunciar judicialmente un hecho de violencia familiar, son las enunciadas en el artículo 4º de la presente Ley y toda persona que haya tomado conocimiento de los hechos de violencia.

ARTÍCULO 14.- CUANDO las víctimas fueran menores de edad, incapaces, ancianos o discapacitados que se encuentren imposibilitados de accionar por sí mismos, están obligados a hacerlo sus representantes legales, los obligados por alimentos y/o el Ministerio Público, como así también quienes se desempeñen en organismos asistenciales, educativos, de salud y de justicia y en general, quienes desde el ámbito público o privado tomen conocimiento de situaciones de violencia familiar o tengan sospechas serias de que puedan existir.

ARTÍCULO 15.- LA denuncia podrá efectuarse ante las unidades judiciales o cualquier otro organismo al que

por vía reglamentaria se le otorgue esa función. En todas las unidades de la Provincia, habrá personal capacitado para recepcionar, orientar y canalizar los reclamos, inquietudes y presentaciones en materia de violencia familiar, estando obligados a entregar copia de la denuncia.

ARTÍCULO 16.- A efectos de formalizar la denuncia de la manera prevista en el artículo anterior, se habilitará un formulario especial que tendrá carácter reservado y su distribución estará garantizada, en toda la Provincia, por el Tribunal Superior de Justicia. Su diseño, contenido y finalidad serán determinados por la reglamentación correspondiente.

ARTÍCULO 17.- POR razones de seguridad, los organismos que recepcionen las denuncias por violencia familiar y los que intervengan en la sustanciación del proceso, mantendrán en reserva la identidad del denunciante.

ARTÍCULO 18.- EL funcionario público, cualquiera sea su rango, que incumpla parcial o totalmente lo preceptuado en el presente Capítulo, será sancionado de manera severa, de acuerdo a lo que por vía reglamentaria se determine.

CAPÍTULO IV Del Procedimiento Judicial

ARTÍCULO 19.- EL procedimiento será gratuito, conforme lo establece la Ley No 7982 y sus modificatorias, actuado y aplicando las normas del proceso abreviado en todo lo que no se oponga a la presente Ley.

ARTÍCULO 20.- EN toda cuestión de violencia familiar, además de las medidas previstas en la legislación vigente, el Juez -de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público-, deberá disponer todas las medidas tendientes a la protección de la vida, la integridad física o emocional de la víctima, la libertad y seguridad personal, así como la asistencia económica e integridad patrimonial del grupo familiar.

A tal efecto, la Autoridad de Aplicación dispondrá la creación de una unidad de constatación de los hechos denunciados, que funcionará todos los días durante las veinticuatro (24) horas y su integración será determinada por vía reglamentaria.

ARTÍCULO 21.- PARA el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo anterior, el Juez podrá adoptar las siguientes medidas cautelares u otras análogas:

- Disponer la exclusión del agresor de la residencia común y la entrega inmediata de sus efectos personales, labrándose inventario judicial de los bienes muebles que se retiren y de los que permanezcan en el lugar;
- Disponer el reintegro al domicilio o residencia de la víctima que hubiere salido del mismo con motivo de los hechos denunciados y por razones de seguridad personal;
- Disponer -inaudita parte- cuando razones de seguridad lo aconsejen, el inmediato alojamiento de la o las víctimas en el establecimiento hotelero o similar más cercano al domicilio de éstas. Asimismo, en todos los casos, podrá disponer que el alojamiento temporario sea en la residencia de familiares o allegados que voluntariamente acepten lo dispuesto. La lista de los establecimientos hoteleros o similares, será provista por el Tribunal Superior de Justicia y con cargo a la partida presupuestaria que anualmente asigne, a tal fin, el Poder Ejecutivo Provincial;
- Prohibir, restringir o limitar la presencia del agresor en el domicilio o residencia, lugares de trabajo, estudio u otros que frecuente también la víctima;
- Prohibir al agresor comunicarse, relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier conducta similar, en relación con la víctima, demás personas afectadas, testigos o denunciantes del hecho;
- Incautar las armas que el agresor tuviere en su poder, las que permanecerán en custodia en sede judicial;
- En caso que la víctima fuere menor o incapaz, puede otorgar su guarda provisoria a quien considere idóneo para tal función, si esta medida fuere necesaria para su seguridad psicofísica y hasta tanto se efectúe un diagnóstico de situación;
- Establecer, si fuere necesario y con carácter provisional, el régimen de alimentos, tenencia y de visitas, mientras se inician, sustentan y resuelven estas cuestiones por el trámite que para ellas prevén las normas procedimentales en vigencia;
- Solicitar las acciones previstas en el inciso g) del artículo 33 de la presente Ley -Programa de Erradicación de la Violencia Familiar-, y
- Disponer la asistencia obligatoria del agresor a programas de rehabilitación.

ARTÍCULO 22.- EN todos los casos previstos en el artículo anterior, el Juez ordenará a quien entienda conveniente, la supervisión de su cumplimiento, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública para asegurarlo. En un plazo no mayor de diez (10) días de adoptada la medida, convocará una audiencia, a los efectos de su evaluación. En caso de no comparecencia, dispondrá la conducción del agresor.

ARTÍCULO 23.- LAS medidas adoptadas tendrán el alcance y la duración que el Juez disponga, conforme a los antecedentes que obren en el expediente, pudiendo disponer su prórroga cuando perduren situaciones de riesgo que así lo justifiquen.

ARTÍCULO 24.- EL Juez o Tribunal deberá comunicar la medida cautelar decretada a las instituciones y/u organismos públicos o privados a los que se hubiere dado intervención en el proceso, como así también a aquellos cuyos intereses pudieren resultar afectados por la naturaleza de los hechos.

ARTÍCULO 25.- UNA vez adoptadas las medidas cautelares establecidas en el artículo 21 de la presente Ley, el Tribunal, de oficio, ordenará realizar un diagnóstico de situación entre los sujetos involucrados. El mismo será elaborado en forma interdisciplinaria y tendrá como objeto determinar los daños físicos o psíquicos sufridos por la víctima, evaluar las circunstancias de peligro o riesgo y el entorno social.

ARTÍCULO 26.- EL Juez o Tribunal interviniente, en caso de considerarlo necesario, requerirá un informe al lugar de trabajo y/o lugares donde tenga actividad la parte denunciada, a los efectos de tener un mayor conocimiento de la situación planteada.

Asimismo, deberá solicitar los antecedentes judiciales y/o policiales de la persona denunciada, con la finalidad de conocer su conducta habitual.

ARTÍCULO 27.- EN todos los casos el principio orientador será prevenir la revictimización, prohibiéndose la confrontación o comparecencia conjunta de la víctima y el agresor.

ARTÍCULO 28.- CUANDO intervenga un Juzgado con competencia en materia penal o un Juzgado con competencia en materia de menores en una situación de violencia familiar, cualquiera sea la resolución que adopte, deberá remitir, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de haber tomado conocimiento de los hechos, testimonio completo de las actuaciones y de la resolución adoptada al Juez con competencia en materia de violencia familiar.

Asimismo, cuando se haya dispuesto el procesamiento con prisión, deberá comunicar la excarcelación o la concesión de salidas transitorias o cualquier forma de conclusión del proceso, al Juzgado competente en materia de violencia familiar, previo a su efectivización. También deberá ponerlo en conocimiento de la víctima en su domicilio real y de su letrado en el domicilio constituido, de la forma que entienda más eficaz para obtener la finalidad de protección perseguida por esta Ley.

ARTÍCULO 29.- LOS Juzgados con competencia de urgencia en materia de violencia familiar, comunicarán

los hechos con apariencia delictiva que hayan llegado a su conocimiento, dentro de las veinticuatro (24) horas, al Juzgado con competencia penal de turno, sin perjuicio de continuar la acción propia y las medidas provisionales que hubiere adoptado. Para los delitos de instancia privada, se requerirá el expreso consentimiento de la víctima o de su representante legal, en el caso de menores o incapaces.

ARTÍCULO 30.- ANTE el incumplimiento de las obligaciones impuestas al agresor, o en caso de comprobarse reiteraciones de hechos de violencia familiar, el Juez podrá imponer al denunciado instrucciones especiales, entendiéndose por tales las especificadas en la Ley No 8431 y sus modificatorias -Código de Faltas de la Provincia de Córdoba-, bajo la supervisión de la Autoridad de Aplicación de esta Ley, quien informará sobre el cumplimiento de la medida.

ARTÍCULO 31.- LOS tribunales actuantes llevarán estadísticas de los casos registrados, considerando las características socio-demográficas, naturaleza de los hechos y resultados de las medidas adoptadas, resguardándose debidamente el derecho a la intimidad de las personas incluidas.

CAPÍTULO V De las Políticas Públicas de Prevención

ARTÍCULO 32.- A los efectos de la presente Ley, se entiende como prevención, la promoción de una cultura que favorezca la creación de un marco objetivo de equidad, libertad e igualdad, entre los miembros de una familia, eliminando las causas y patrones conductuales que generan y refuerzan la violencia familiar.

ARTÍCULO 33.- CRÉASE como políticas públicas de prevención y de atención, el PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, el que contendrá las siguientes acciones:

- Prevenir la violencia familiar mediante la divulgación y sensibilización de la problemática;
- Impulsar procesos de modificación de patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, bajo una perspectiva de equidad, llevando a cabo jornadas de sensibilización en forma conjunta, mediante convenios, con los municipios y comunas de la Provincia que adhieran, con los ministerios y con organismos internacionales;
- Promover el estudio e investigación de las causas y consecuencias de la violencia familiar;
- Determinar el daño sufrido por la víctima y aplicar el tratamiento adecuado para disminuir la trascendencia del mismo;
- Capacitar y concienciar al personal encargado de la procuración e impartición de justicia, policías y demás servidores públicos involucrados, sobre medidas de prevención, asistencia y atención de la violencia familiar;
- Implementar el otorgamiento de un apoyo económico dinerario, no remunerativo ni reintegrable, para que las personas afectadas puedan establecer su residencia temporaria en un lugar preservado del riesgo al que se encontraran expuestas, bajo condición de que se sometan a tratamientos especiales brindados por el equipo interdisciplinario que determine la reglamentación;
- Establecer tratamientos especiales de rehabilitación e inserción, tanto para el agresor como para las víctimas;
- Implementar una línea telefónica gratuita, que funcionará todos los días durante las veinticuatro (24) horas, para la recepción de consultas y ayudas en temas relacionados con la violencia familiar;
- Promover la creación y el fortalecimiento de asociaciones civiles, organismos no gubernamentales y organizaciones sociales, que intervengan en la prevención y atención de la violencia familiar, y
- Implementar toda otra acción orientada al eficaz cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.

CAPÍTULO VI Disposiciones Complementarias

ARTÍCULO 34.- EN todo lo que no esté previsto en la presente Ley, serán de aplicación subsidiaria el Código de Procedimiento Civil y Comercial, el Código de Procedimiento Penal y para la ciudad de Córdoba, la Ley de Fuero de Familia No 7676 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 35.- AUTORIZASE al Poder Ejecutivo Provincial a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para el efectivo cumplimiento de la presente Ley.

ARTÍCULO 36.- EL Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente Ley dentro de los sesenta (60) días de su promulgación.

ARTÍCULO 37.- DERÓGASE toda otra disposición normativa que se oponga a los contenidos y objetivos establecidos en la presente Ley.

ARTÍCULO 38.- TODO conflicto normativo relativo a la aplicación e interpretación deberá resolverse en beneficio de la presente Ley.

ARTÍCULO 39.- ESTA Ley entrará en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

ARTÍCULO 40.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A UN DÍA DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL SEIS.

GUILLERMO ARIAS

SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MARÍA IRENE FERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

DECRETO N° 240

Córdoba, 9 de marzo de 2006

Téngase por Ley de la Provincia N° 9283, cúmplase, protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

DR. SERGIO SEBASTIÁN BUSO
MINISTRO DE GOBIERNO, COORDINACIÓN
Y POLÍTICAS REGIONALES

DR. FÉLIX A. LÓPEZ AMAYA
FISCAL DE ESTADO